

La crisis social amenaza con convertirse en crisis política*

La violenta protesta callejera de un grupo de jóvenes, ocurrida el 5 de julio, en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador, desembocó en el asesinato de dos policías, en varios heridos de bala, incluido un alto funcionario de ese centro de estudios, y en varios lesionados. Los jóvenes protestaban por el encarecimiento del costo de la vida. De esta manera, el enfrentamiento armado entre policías y manifestantes, los muertos y los heridos volvieron a las calles de la capital. Y con ellos trajeron los recuerdos de la violencia que jalonó la guerra civil. La sociedad no debió permitir a los políticos y al gobierno llegar a este extremo.

El gobierno de ARENA no tardó en denunciar al FMLN por romper los acuerdos de paz de 1992. El presidente Saca anunció con dramatismo el regreso del pasado el cual, supuestamente, ya habría sido superado y la democracia salvadoreña se habría consolidado. Pero estos hechos mostraron la realidad nacional en toda su crudeza. La violencia política, un fenómeno insólito en una sociedad muy confiada en sus fortalezas democráticas, perturbó la vida nacional de forma momentánea. La democracia no es sólida, la institucionalidad es débil y la vida es sumamente difícil, en el país. El gobierno es cada vez más incapaz de enfrentar la crisis social, la cual amenaza con convertirse en una crisis política. Los hechos del 5 de julio deben ser entendidos como una advertencia. Constituyen un aviso para sus protagonistas de derecha e izquierda sobre lo que se avecina, si no abandonan la irracionalidad y el extremismo y comienzan a resolver la crisis social. A diferencia de ellos, distintas personalidades y dirigentes de instituciones, iglesias y organizaciones tomaron nota de la seriedad de la advertencia y encontraron voz para condenar la violencia con una firmeza y claridad pocas veces escuchada.

1. Una investigación viciada por la confrontación política

En una democracia consolidada, como la que ARENA y su gobierno dan por sentada, la investigación policial se encarga de esclarecer los hechos, de identificar a los responsables y de acusarlos judicialmente, sin importar el cargo que ocupen o el poder que detenten. Todos los ciuda-

* Editorial, pp. 631-643.

danos, sin excepción, están sometidos a la ley. En El Salvador, en cambio, el gobierno de ARENA y, en menor medida, el FMLN se aprovecharon de los hechos del 5 de julio para continuar con más intensidad su lucha por el poder, sin mostrar ningún respeto a la investigación policial. No podía ser de otra manera. Esos hechos violentos estuvieron precedidos por una confrontación, que ya dura varios años. La explosión de violencia política fue la conclusión lógica de la serie de provocaciones de ambos. La reacción estatal no fue institucional, las reacciones de la policía y la fiscalía tampoco, pues todas ellas respondieron más al prejuicio político que al compromiso por averiguar lo ocurrido. La verdad fue sacrificada, de nuevo, en aras de los intereses del poder.

La violencia política y sus consecuencias, dos asesinados y varios heridos y lesionados, es condenable, en sí misma. Pero tanto el gobierno como ARENA y el FMLN se mostraron más interesados en utilizar a las víctimas como armas arrojadas, que en rechazar la violencia política. No obstante los catorce años de transición, estos partidos no han abandonado aún la vieja mentalidad militar y sus prácticas, sino que los llevaron consigo, al terreno de la lucha política. Ninguno de los dos tolera la existencia del otro y los dos buscan la forma de aniquilarse mutuamente. El resultado de esta absurda concepción de la actividad política democrática es la explosión violenta del 5 de julio. Así como se provocaron, se lanzaron acusaciones recíprocas para obtener ventajas políticas, aun cuando ninguno de los dos tenía claridad sobre lo ocurrido. Los incidentes les proporcionaron munición fresca para continuar su lucha por el poder. En un segundo momento, sin embargo, matizaron estas posturas, aunque sin renunciar del todo a ellas. Los ánimos se calmaron con la misma rapidez con la cual se caldearon, alimentados por las empresas mediáticas. Pero la tranquilidad actual no es más que un compás de espera para reanudar la lucha.

El gobierno y los dirigentes de los partidos debieron haberse guardado los comentarios sobre los hechos, hasta que estos hubiesen sido investigados. Su obligación política y ética era condenar la violencia, en términos enérgicos, y exigir una investigación independiente. Sólo una vez conocido el resultado de esta, tenían cabida las recriminaciones sociales y políticas, ya que la acusación judicial no es competencia suya. Pero sin claridad sobre el desarrollo de los hechos, los dos partidos retomaron con nuevos bríos su ya larga disputa. Es así como el gobierno, siempre tan seguro de sí mismo, lanzó acusaciones incoherentes. El presidente Saca y su Ministro de Gobernación acusaron al FMLN, mientras que el Fiscal General acusó a las pandillas. El Ministro de Gobernación aseguró que el asesinato de los dos policías fue cometido con un *AK-47*, un arma asociada a la guerrilla; pero la fotografía mostró un *M-16*, un arma de guerra, propia del ejército. Pero esto no tiene mayor significado para el esclarecimiento de los hechos porque, hoy en día, no es difícil agenciarse un arma de esas, ya que el gobierno y los partidos no sólo han tolerado que la ciudadanía se arme, sino que las dependencias gubernamentales, encargadas de su control —el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional Civil—, no cumplen con este cometido. Un esfuerzo sistemático para desarmar a la población, haría mucho más difícil la circulación o el acceso a este tipo de armas. Hasta que el arma homicida no sea encontrada, es prácticamente imposible vincular

con ella a quienes aparecen en la fotografía, que dio paso a estas especulaciones. Los juicios del gobierno, de ARENA, de la gran empresa privada y de la empresa periodística expresan más sus prejuicios políticos que la verdad.

El FMLN, por su lado, respondió en el mismo plano. En un primer momento, su dirigencia atribuyó la violencia política a las últimas medidas gubernamentales —la elevación de la tarifa de la electricidad, del agua y del transporte público, la falta de empleo, los proyectos de explotación minera e incluso la construcción de una carretera, en el norte del país—, las cuales habrían colocado a la población en una situación tan insostenible, que la protesta violenta estaría justificada. De acuerdo con la primera reacción del FMLN, las organizaciones que convocaron a la marcha y protagonizaron los hechos no dependen del partido. A sus dirigentes, sin embargo, no les resultó fácil desvincularse de ellas. En sus declaraciones, atribuyeron la responsabilidad de la violencia a policías emboscados, a francotiradores no identificados, a infiltrados, a una conspiración gubernamental, etc. Sólo seis días después, el FMLN dio a conocer su posición oficial.

El nivel del enfrentamiento es tal que las dirigencias de ARENA y del FMLN casi no atienden razones. En la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, después del 5 de julio, sus diputados se enfrascaron en una batalla de insultos e infundios, durante cuatro largas horas, en lugar de discutir la agenda nacional. A juzgar por la intensidad de la disputa y por su duración, para ellas, el problema nacional más grave es la existencia de la otra. Desde esta estrecha perspectiva, no deja de faltarles razón. En efecto, en cuanto uno de ellos se interpone como obstáculo para que el otro detente el poder total del Estado, debe ser neutralizado o debe desaparecer. Al parecer, para esas dirigencias, la dictadura es la mejor garantía del bienestar de la nación. Por lo tanto, la responsabilidad de lo ocurrido, y también de la crisis social, es compartida. Aunque ARENA tiene más responsabilidad, porque ejerce un control casi completo del gobierno y, con él, del ejercicio legítimo de la fuerza, la cual, en ninguna circunstancia, puede ser usada con la misma irracionalidad que el agresor. La fuerza pública debe ser ejercida de forma proporcional y eficaz. El recurso a la violencia siempre es un mal objetivo, al cual sólo puede recurrirse cuando se han agotado los medios pacíficos disponibles y, en cualquier caso, siempre de forma racional.

En un principio, ARENA y el FMLN habrían conseguido lo que se propusieron. ARENA encontró nuevos argumentos para descalificar al FMLN y revivir la amenaza del terrorismo. Sin aguardar el resultado de la investigación, habló de un partido armado con campos de entrenamiento militar. En consecuencia, no sólo cuestionó su legalidad, sino que amenazó con expulsarlo del registro oficial de partidos. Asimismo, pidió el desafuero de varios de sus diputados, quienes habrían utilizado su inmunidad para

**El pasado no ha regresado, porque el país nunca salió de él. [...]
El FMLN todavía cree que la violencia es la vía eficaz para hacer la revolución. ARENA, sin visión, ni creatividad, aún sigue creyendo que la única alternativa para el país es conservar el control total del Estado y reacciona a la violencia con más violencia.**

proteger a los dirigentes de las protestas callejeras, e incluso a uno de los asesinos de los policías. De esta manera, ARENA, al fin, pudo volver a colgarle al FMLN el cartel de terrorista. Su siguiente paso será, al parecer, una ley especial para perseguir terroristas, aun cuando este delito ya está contemplado por el Código Penal.

El FMLN también habría logrado sus propósitos, al menos, en principio. Habría conseguido que el gobierno de ARENA cayera en la provocación, con lo cual pudo acusarlo de represivo e intolerante con la ciudadanía pacífica que, en pleno ejercicio de sus derechos, protestaba por el aumento del costo de la vida. La movilización fue la oportunidad ideal para mostrar al gobierno de ARENA su poder. Sin embargo, un balance objetivo de lo ocurrido da que el FMLN perdió más que lo que ganó. Aun cuando lanzó sus acusaciones contra ARENA, la avalancha de acusaciones gubernamentales lo puso a la defensiva. Estas volvieron a identificarlo como un partido violento e incluso terrorista. En cualquier caso, como poco confiable y desestabilizador. La dirigencia del FMLN fue obligada a negar que la protesta hubiese sido violenta, que la brigada que protagonizó los hechos estuviese vinculada al partido, que los acusados del doble homicidio fueran militantes o conocidos, que el partido representase una amenaza para la estabilidad nacional, etc. En suma, el gobierno de ARENA y sus aliados consiguieron reforzar la imagen predominante del FMLN en la opinión pública, que lo proyecta como un partido violento, al cual hay que temer. La encuesta postelectoral del Instituto Universitario de Opinión Pública registra que esta fue una de las razones para no haber votado por este partido, en marzo pasado. Es evidente que el recurso a la violencia no ampliará la aceptación del FMLN entre la población.

Seis días después de los hechos, el FMLN rectificó su postura inicial y condenó sin ambigüedades los homicidios y la violencia, se desvinculó de la protesta callejera y reconoció que los acusados, a quienes calificó de aventureros y extremistas, habían pertenecido al partido. Una postura menos timorata, dada la gravedad de lo ocurrido, hubiera reaccionado con rapidez y firmeza. Las evasivas primeras no contribuyeron a establecer con claridad la posición del partido, con lo cual ARENA pudo continuar lanzando acusaciones. Por otro lado, las evidencias exhibidas por el gobierno, reunidas con una eficacia inusitada, echaron por tierra la defensa del FMLN. Entonces, este revisó su posición inicial. Pero el daño ya estaba hecho. Las declaraciones de algunos militantes, contrarias a la versión oficial, empeoraron su situación.

En lugar de concentrar la atención de los políticos y de la opinión pública en la crítica situación económica y social del país, la protesta violenta y las reacciones posteriores desviaron el interés hacia las acusaciones recíprocas y las sucesivas aclaraciones de los dos partidos. Por lo tanto, el FMLN consiguió lo contrario a lo que se proponía. Desde entonces, ya no pudo continuar endilgando al gobierno de Saca el encarecimiento de la vida, pues debió concentrarse en su propia defensa, la cual, por otro lado, no contribuyó a disminuir el temor que sus posturas suscitan en la gente.

Una investigación profesional hubiera colocado en su sitio a las dirigencias de estos partidos e incluso al presidente Saca, quien volvió a confundir su

rol de gobernante con el de presidente de un partido político, lo cual demuestra la incompatibilidad de ambos cargos. Su interés primordial es descalificar al FMLN como alternativa legítima de poder, no el esclarecimiento de los hechos para así identificar a los responsables y acusarlos judicialmente. Todos pidieron investigación, pero ninguno estaba interesado en sus resultados. Todos emitieron juicio sobre lo ocurrido, desde posturas tomadas de antemano. Por lo tanto, la investigación era inútil y, si esta hubiera contradicho los prejuicios propios, hubiera sido rechazada. Pero todo esto ya es pasado. El interés en la investigación se difuminó con la misma rapidez con la cual surgió. No obstante, con toda probabilidad será recordado en la próxima campaña electoral.

El pasado no ha regresado, porque el país nunca salió de él. Su memoria todavía no ha sido procesada socialmente. El FMLN todavía cree que la violencia es la vía eficaz para hacer la revolución. ARENA, sin visión, ni creatividad, aún sigue creyendo que la única alternativa para el país es conservar el control total del Estado y reacciona a la violencia con más violencia.

2. Peligrosa combinación de violencia y política

La investigación del Fiscal General no se propuso esclarecer los delitos cometidos. De hecho, no pudo individualizarlos y, por lo tanto, tampoco presentó pruebas al juez. El prejuicio político y la incapacidad llevan a policías y fiscales a acusar a los colectivos, en este caso, al FMLN y a “los estudiantes” —las maras, es otro grupo preferido—, lo cual está reñido con el procedimiento penal, que exige la individualización del delito. Por eso, las acusaciones no prosperan en los tribunales. Ahora bien, el interés político se dio por satisfecho con la acusación colectiva contra el FMLN. De esta forma, el asesinato de los dos policías, y los heridos fueron simples accesorios, muy oportunas, por cierto, para la estrategia gubernamental. Por eso, el ataque contra el edificio de la Rectoría de la Universidad de El Salvador es irrelevante. Esa estrategia explica también la eficacia gubernamental. Una eficacia desconocida en la investigación de casi todos los demás hechos violentos, donde no hay de por medio un interés político inmediato. En este caso, el gobierno de Saca insistió incluso en identificar a los autores intelectuales, cuya relevancia política tenía gran valor. En la mayoría de los homicidios, el gobierno se conforma con la identificación del autor material, cuando logra identificar a alguien. Donde hay de por medio personajes poderosos, el interés por esclarecer el crimen es nulo. La vida humana no tiene valor absoluto para este gobierno, sino que este depende de su relevancia para su lucha por el poder. Es así como las víctimas siguen siendo irrespetadas no sólo por el victimario, sino que también por el gobierno, que dice defenderlas. En realidad, las utiliza para fines partidarios muy particulares.

En una sociedad con una institucionalidad fuerte, los intereses electorales de los partidos no intervienen en una investigación policial, de la cual, por otro lado, nadie está exento, ni siquiera el primer ministro ni tampoco los legisladores. [...] En un Estado constitucional de derecho no es normal acusar y luego investigar. En la conducta del funcionario gubernamental deben prevalecer la racionalidad y la ética, no la pasión ni mucho menos el interés electoral.

Este caso ilustra con claridad meridiana los procedimientos utilizados por la investigación policial. La acusación gubernamental fue lanzada sin pruebas que la respaldasen. No tomó en cuenta el resultado de la autopsia de los dos asesinados, ni el análisis balístico, ni estableció relación física entre el arma homicida y los policías asesinados, ni consideró las declaraciones de testigos que aseguraron que desde los helicópteros dispararon contra las instalaciones universitarias. Los señalamientos del FMLN, que atribuyó los hechos a francotiradores e infiltrados, tampoco fueron investigados. Es inexplicable cómo, conociendo la existencia de campos de entrenamiento militar, estos no hayan sido intervenidos oportunamente por la policía. En lugar de exonerarla, su actuación debe ser examinada con atención, porque si bien fue agredida por los manifestantes, es igualmente cierto que no supo neutralizarlos. Es muy probable que cuando cayeron los primeros agentes lesionados, haya reaccionado con furia y no con la cabeza fría. La unidad especializada en el mantenimiento del orden no está preparada para usar los métodos de una policía respetuosa del derecho, sino para reprimir con brutalidad.

La procedencia del arma de guerra podría ser crucial para demostrar la existencia de un grupo armado, sin que ello signifique, de forma mecánica, tal como implican el gobierno y la empresa periodística, que este se encuentre vinculado al FMLN. Semejante vínculo no puede sostenerse sin pruebas. La lógica gubernamental puede revertirse, por ejemplo, en el caso de las cada vez más frecuentes ejecuciones sumarias de jóvenes. De la misma manera, según la lógica del gobierno de Saca, esas ejecuciones podrían atribuirse a grupos armados vinculados a ARENA, a la policía o al ejército. En ambos casos, esos vínculos sólo pueden ser esclarecidos por una investigación policial. Es más, los grupos armados existen y son de naturaleza variada. Están vinculados a las agencias de seguridad privada, a las pandillas, al crimen organizado, a los contrabandistas, a la limpieza social y a la actividad política. No sería sorprendente que algunos de ellos estén incluso vinculados a la dirigencia de los partidos de derecha o a altos funcionarios de ARENA o a respetados empresarios. A estos actores, bien conocidos por la historia salvadoreña, se han unido otros, que también usan la violencia con el mismo descaro. Las pandillas son las más conocidas, pero también hay indicios de la actividad de nuevos grupos de exterminio. El gobierno todavía no ha investigado a estos grupos, cuyas actividades constituyen una amenaza real para la estabilidad y la seguridad ciudadana. Sin embargo, cargó con todas sus energías contra el FMLN, que, en la práctica, no representa más que una amenaza a la hegemonía política de ARENA y una amenaza, además, relativa.

Asimismo, cargó contra la Universidad de El Salvador sin mayor razón. El gobierno de ARENA aprovechó que los hechos ocurrieron en sus proximidades para ajustar cuentas y volver a estigmatizar a la institución y, en concreto, a su dirección, la cual fue acusada de complicidad y displicencia con los vagos y delincuentes que la frecuentan y que la habrían convertido en tierra de nadie. En este contexto, sus fantasías, compartidas con los gobiernos militares de antaño, como la existencia de túneles, de armas de guerra, de documentación comprometedoras, de evidencias conspirativas, etc., recobraron vida. La malicia de la gran prensa se encargó de lo demás.

Todo ello pese a que sus máximas autoridades colaboraron con la Fiscalía General y la policía y a que fueron las únicas que exigieron con insistencia la investigación de los hechos. Pero el gobierno estaba ansioso por demostrar a la comunidad universitaria que podía penetrar en sus instalaciones y registrarlas. Un golpe de efecto, sin duda. Pero irrelevante para la investigación de los disturbios del 5 de julio. Al final, la policía encontró poca cosa, en comparación con sus desbocadas expectativas. Hay que reconocer, sin embargo, que el registro fue llevado a cabo por orden judicial e inusitada diligencia. La explicación que la policía dio de este fiasco fue tan inconsistente como sus actuaciones. No encontró lo que buscaba, porque el armamento habría sido sacado antes, lo cual plantea otra cuestión difícil de resolver, cómo lo hicieron, puesto que el recinto universitario estaba cercado por la fuerza policial.

En una sociedad con una institucionalidad fuerte, los intereses electorales de los partidos no intervienen en una investigación policial, de la cual, por otro lado, nadie está exento, ni siquiera el primer ministro ni tampoco los legisladores. Los indicios fundados son razón suficiente para investigar. En un Estado constitucional de derecho no es normal acusar y luego investigar. En la conducta del funcionario gubernamental deben prevalecer la racionalidad y la ética, no la pasión ni mucho menos el interés electoral. En el país, sin embargo, las instituciones están contaminadas por la polarización protagonizada por ARENA y el FMLN. Esta contaminación resulta más crítica aún en las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, las cuales, al igual que antes de 1992, se han vuelto a alinear con ARENA y su gobierno y en contra del FMLN y de la oposición, en general. Estos últimos son considerados enemigos de la seguridad nacional y potencialmente violentos, y, en consecuencia, son espiados por los organismos de inteligencia y seguridad estatal. Por medio del espionaje político, el gobierno de ARENA tiene acceso a sus planes, que denuncia por desestabilizadores. El FMLN no ha permanecido pasivo, sino que montó su propio aparato de inteligencia para espiar a los organismos de seguridad e inteligencia estatal. Mientras tanto, gobierno y partidos se espían entre sí, la población permanece indefensa.

El país no conoce la tolerancia como factor de cohesión social con potencial para generar seguridad. Tanto el gobierno como el FMLN prefieren usar la fuerza para poner orden o para imponerse a su contrario. La sociedad salvadoreña congenia con el autoritarismo y lo ve con normalidad, tanto que este es una de sus opciones para reaccionar a la crisis de seguridad ciudadana. Por eso, la reducción de las libertades ciudadanas para garantizar el orden social ante la amenaza que representan la delincuencia, la violencia social o la crisis sociopolítica es bien vista. De hecho, el escalamiento del uso de la fuerza es perceptible desde hace tres años. El gobierno tipificó los delitos de las pandillas como terrorismo e intenta ampliar esta categoría para incluir la protesta social y política, varios grupos del sector privado han solicitado la intervención del ejército y existen indicios de la existencia de un organismo de inteligencia ilegal, dirigido por militares, que actúa en coordinación con algunas de las empresas grandes de seguridad privada.

Cada vez son más frecuentes las denuncias de asesinatos y de hechos extraños o confusos, atribuidos tanto a ARENA como al FMLN. En las filas del FMLN han surgido voces que se pronuncian a favor de la lucha armada, mientras la evidencia sobre la existencia de grupos armados, dedicados a la limpieza social, en particular, a eliminar pandilleros, se acumula. En el momento que sus jefes lo juzguen oportuno, esos grupos podrían pasar de la limpieza social a la política. De esta manera, la cultura violenta y la política partidista tienden a mezclarse y podrían estar en proceso de organización. Las pandillas, el epítome de la violencia social, ya son utilizadas por los dos partidos. En efecto, portavoces del FMLN reconocieron, en conferencia de prensa clandestina, en una de las alcaldías del área metropolitana, su vinculación con las pandillas, sin ser desautorizados por la dirigencia del partido. Pero también ARENA recurre a las pandillas contra las que tanto despotrica. El mismo director de la policía reconoció que estas se encargaron de la seguridad de las zonas donde el partido desarrolló actividades electorales, en la recién pasada campaña. La combinación de la política partidista con la violencia sólo servirá para profundizar la crisis social, ya de por sí bastante compleja, con la agravante de no aportar ninguna solución verdadera.

3. El peligro de convertir la crisis social en crisis política

ARENA y el FMLN, en el enfrentamiento posterior a los hechos del 5 de julio, rompieron uno de los compromisos fundamentales contraídos en los acuerdos de 1992. En este instrumento, se comprometieron a no utilizar la violencia en la política. En sentido estricto, esos disturbios no constituyen la primera trasgresión del compromiso, pero marcan, sin ninguna duda, una ruptura, a la cual llegaron después de varios años de displicencia e incumplimiento. En efecto, las campañas electorales de ambos partidos y de algunos grupos satélites han sido cada vez más violentas; asimismo, se han aprovechado del estado caótico de la seguridad ciudadana para cometer fechorías y han manipulado la institucionalidad, surgida de los acuerdos de 1992 para garantizar, precisamente, que esto no volviera a suceder. Las dos últimas campañas electorales dejaron un saldo de doce muertos, mientras proliferan los asesinatos, cuyos móviles parecen ser políticos o en los cuales hay indicios de encubrimiento por parte del poder político.

Los disturbios del 5 de julio son una alerta para la sociedad salvadoreña sobre las consecuencias trágicas del deterioro creciente de la institucionalidad y de la convivencia. La sociedad no puede permitir que los actores políticos y gubernamentales actúen a su arbitrio sin control eficaz. La amenaza no proviene de la sociedad como tal, ni siquiera de quienes votaron por estos partidos, sino de quienes han interpretado los votos recibidos como autorización para reclamar el poder absoluto. Esta pretensión absurda empuja de nuevo el quehacer político al despeñadero. Algunas personalidades, iglesias e instituciones han percibido el peligro con claridad y han levantado su voz para pedir a los partidos y al gobierno detener la escalada de violencia política y social, y para exigirles ocuparse de la problemática realidad nacional, por medios políticos y no violentos.

El cambio no será fácil. Las dirigencias de ARENA y del FMLN tendrían que renunciar a prácticas inveteradas y a planes estratégicos. En los disturbios del 5 de julio, el gobierno y ARENA amenazaron con ilegalizar al FMLN, sin violentar la formalidad institucional, medida que, de consumarse, lo colocaría al margen de la política partidista. El gobierno fue más allá y amenazó también con desaforar a aquellos diputados asociados con las protestas violentas. Con la desaparición del FMLN del escenario político institucional, desaparecería el obstáculo que, hoy por hoy, entorpece al gobierno desarrollar su agenda política. Con la ilegalización vendría la autorización para perseguir al FMLN como organización ilegal, armada y terrorista, por ende, de máxima peligrosidad para la seguridad nacional. Por lo mismo, también le impediría participar como tal en las próximas elecciones, con lo cual el campo quedaría despejado para ARENA y sus aliados. En las filas de ARENA no faltan radicales extremistas que cabildan en esta dirección. Pero con ello darían la razón a quienes, dentro del FMLN, sostienen que la vía política está cerrada para acceder al poder del Estado y, por lo tanto, abogan por la vía armada. En ambos lados hay quienes se inclinan por llevar las fuerzas políticas y gubernamentales a una nueva confrontación “definitiva”. Esta alternativa, aparte de otras consideraciones, daría al traste con los planes de promoción de las inversiones extranjeras y del turismo del gobierno de ARENA, dos elementos claves de su estrategia económica.

El cierre progresivo del espacio para la política de oposición y, en particular, para el FMLN, un hecho comprobable empíricamente (ver “Hacia la dictadura del gran capital”, ECA 687, 2006), hizo que este optase por la confrontación sistemática. El FMLN todavía no ha podido controlar ninguna legislatura, excepto en aquellos casos donde se necesita el voto calificado y sólo de manera temporal, porque hasta ahora, también ha perdido este poder a lo largo de todas legislaturas. Su meta última, la Presidencia de la República, aún no se avizora en el horizonte. La participación en la política institucional no le ha resultado tan fácil como tal vez pensó, cuando aceptó formar parte de ella. Es muy probable que sus proyecciones incluyeran acceder pronto a la dirección del poder ejecutivo. La derrota aplastante del antiguo enemigo militar en las urnas era, según sus previsiones, una cuestión de tiempo, dada su popularidad y la justeza de su causa revolucionaria. Pero su pronóstico no se cumplió. Una elección tras otra ha demostrado que el FMLN no cuenta con apoyo electoral para alcanzar sus metas. En lugar de analizar sus debilidades, atribuye su relativo fracaso al poderío electoral de ARENA, en lo cual no le falta razón. No obstante que este poder es avasallador y que cada vez más ha sido ejercido

El Salvador se encuentra sumido en una crisis social de grandes proporciones. Sus principales problemas económicos y sociales, que aquejan a la mayor parte de la población, no son resueltos ni están en vías de resolverse. Ahora bien, sin las correcciones adecuadas y oportunas, esta crisis puede volverse más compleja aún y desembocar en una crisis política. De ahí que el desafío de la sociedad salvadoreña consista en exigir a los partidos y al gobierno por igual hacer a un lado su lucha por el poder y aplicarse a la resolución de la agenda de la crítica realidad nacional.

de forma ilegal y violenta, el factor fundamental que impide su triunfo electoral es la ausencia del apoyo masivo, en las urnas. Pero la dirigencia del FMLN se resiste a reconocer que aun cuando asegura defender los intereses populares, el pueblo no vota en masa por sus candidaturas.

A raíz de la derrota electoral del año 2004, una elección presidencial que daba por ganada, el FMLN optó por la confrontación abierta con ARENA y su gobierno. Intensificó, pues, los ataques y las provocaciones. Simultáneamente, anunció su plan de sacar a la calle a la población para reclamar aquello que se le negaba en las urnas y en la lucha política. La protesta callejera se volvió más agresiva y violenta. El partido puso sus estructuras y las instituciones gubernamentales bajo su control al servicio de este plan. En la Asamblea Legislativa, la oposición a las propuestas del poder ejecutivo fue tan sistemática como ineficaz. Para contrarrestar la deserción de sus propios diputados y reforzar su proyecto, exigió obediencia absoluta a la cúpula del partido. A los descontentos, los expulsó o los marginó. En las elecciones legislativas y municipales recién pasadas, sometió a riguroso escrutinio las candidaturas para garantizar la fidelidad de los seleccionados.

La protesta callejera del FMLN incluye fuerzas de choque, reforzadas por pandilleros del gran San Salvador, quienes tienen sus propias razones para ajustar cuentas con el gobierno. Esta combinación de violencia política y violencia juvenil puede ser explosiva, pues abre la posibilidad para que no sólo las pandillas, sino también el crimen organizado se convierta en componente instrumental de la política, local y nacional. Es imposible, por otro lado, que el elevado nivel de violencia del país, de hecho, uno de los países más violentos del mundo, no distorsione el proceso político. El proyecto, según dejaron entrever algunos militantes del FMLN, en esclarecedoras declaraciones a la prensa, no desmentidas o desautorizadas por la dirigencia del partido, incluye estructuras militares paralelas. Dicha dirigencia sólo ha reconocido la existencia de grupos fuera de su control. Pero es difícil comprender cómo es posible que en un partido tan centralizado como el FMLN, que no tolera la desobediencia ni la disidencia, existan tales grupos. Esta ambigüedad favorece los planes del gobierno de ARENA. El recurso a estructuras militares y a pandilleros es otra constatación del limitado arraigamiento del partido, en los sectores populares. Un partido con una popularidad masiva no necesita paramilitares, ni pandilleros para alimentar una protesta pública. De esta forma, el FMLN libra una lucha revolucionaria en nombre de un pueblo salvadoreño, el cual observa su desenvolvimiento con escepticismo y temor, y no pocas veces incluso con hastío.

No obstante que la situación del país es delicada y exige prudencia y sensatez, la crisis no es de naturaleza política, sino social. Los miembros del gabinete no han renunciado, ni han sido despedidos en bloque. Las políticas no son incoherentes y las dependencias del ejecutivo operan con normalidad. El gobierno decide y ejecuta. La institucionalidad, aunque debilitada, no se ha quebrado como para imponer el cambio de régimen. La inestabilidad política no es permanente. No hay golpes de Estado, ni revoluciones, ni contrarrevoluciones. Así, pues, no es admisible hablar de

crisis política, pero sí de crisis en la institucionalidad formal, causada por la existencia de poderes fácticos, económicos y armados. En sentido estricto, El Salvador se encuentra sumido en una crisis social de grandes proporciones. Sus principales problemas económicos y sociales, que aquejan a la mayor parte de la población, no son resueltos, ni están en vías de resolverse. Ahora bien, sin las correcciones adecuadas y oportunas, esta crisis puede volverse más compleja aún y desembocar en una crisis política. De ahí que el desafío de la sociedad salvadoreña consista en exigir a los partidos y al gobierno por igual hacer a un lado su lucha por el poder y aplicarse a la resolución de la agenda de la crítica realidad nacional.

Desde esta perspectiva, la coyuntura debe ser interpretada como una llamada de atención sobre la fragilidad de la transición de postguerra. La sociedad salvadoreña, en su conjunto, aunque ha negado su pasado repetidamente, sigue sumergida en él. Por eso, la institucionalidad no ha podido consolidarse, los partidos no desempeñan su crucial función de intermediación y el gobierno tampoco asume sus obligaciones de velar por el interés y el bienestar común. El fracaso en la erradicación de la violencia social, que amenaza con mezclarse con la política, sugiere que la tarea prioritaria es fortalecer la institucionalidad, surgida de los acuerdos de 1992. La poca atención prestada al fortalecimiento institucional, por privilegiar a agentes económicos poderosos, nacionales y transnacionales, y a sus nuevas formas de acumulación, y a la construcción de una estructura social que haga posible la convivencia, para lo cual es indispensable pasar por la reconciliación, otra tarea descuidada, después de 1992, constituyen los vacíos más grandes de la transición salvadoreña. En la medida en que la institucionalidad sea fortalecida a favor del bienestar general y en la medida en que la convivencia social esté garantizada, es posible controlar la violencia social e impedir que el país vuelva a optar por la violencia política como medio privilegiado para resolver sus problemas.

La experiencia de la postguerra salvadoreña demuestra que la sociedad y sus organizaciones e instituciones no deben desentenderse de los partidos políticos y del gobierno. Sin la presión social, ejercida desde una supervisión rigurosa y exigente, estos se dejan llevar por ambiciones destructivas. En la práctica, son ineficientes, corruptos y egoístas. Tienen muy poco respeto por la vida humana y no están comprometidos con el régimen democrático, sino con los poderes fácticos a los que sirven y en función de los cuales existen. Aunque los de la derecha lo son más, por estar más próximos al poder económico del capital transnacional. La lucha por el poder que libran, desde 1992, ha abierto el espacio para que algunos sectores se radicalicen en su interior. La institucionalidad se ha debilitado de forma gradual por la ineficiencia y la corrupción gubernamentales. El Estado es tan débil que no ha podido consolidar ni legitimar el monopolio de la fuerza; existen elevados niveles de impunidad, en los ámbitos de la violencia social y delincriminal, y la violencia generalizada refuerza la cultura política autoritaria entre la población, la cual no favorece la construcción de estructuras para la convivencia humana. Estos elementos, unidos a la polarización política, hacen que la violencia se presente como una empresa rentable para los partidos y para el gobierno.

En este caldo se han cultivado la intolerancia, los resentimientos y el autoritarismo. Las instituciones actuales se inscriben, sin duda, en la formalidad democrática, pero, en la práctica, los políticos hacen caso omiso de ella y recurren a mecanismos paralelos, por cuyo medio ejercen un poder patrimonial y violento, fundamentado en el clientelismo. Las largas décadas de regímenes autoritarios crearon una ciudadanía acostumbrada a actuar al margen de las instituciones, en condiciones conflictivas y en el esquema del clientelismo político. El fracaso de la institucionalidad de 1992 impidió su reeducación en las prácticas democráticas. En vez de ello, la transición reforzó esos esquemas, con lo cual la recreación de los mecanismos paralelos de poder, utilizados para resolver las demandas sociales de ciertos grupos, ha sido inevitable.

Los líderes políticos y gubernamentales, aunque necesarios para el Estado, no dan ya más de sí. Desperdiciaron la oportunidad abierta por los acuerdos de 1992 y la transición. Hizo falta modificar la mentalidad y las actitudes, heredadas de la dictadura militar y la guerra, una tarea casi imposible, pero, por eso mismo, más urgente y necesaria. En la actualidad, es evidente que con un sistema político tan polarizado como el actual no es posible resolver los problemas económicos y sociales. El espacio común donde debiera tener lugar el encuentro para concertar las políticas públicas y construir la institucionalidad y la convivencia es inexistente. El país crecerá en la medida que lo hagan la economía estadounidense, dados los vínculos comerciales y laborales existentes, y en la medida que lo haga la economía mundial; pero no experimentará el desarrollo humano, ni el bienestar social, mientras las élites que lo dirigen se excluyan mutuamente. En la actualidad, de hecho, el enfrentamiento sistemático explica, en gran parte, el estancamiento de la vida social y política, así como también el surgimiento de grupos dispuestos a superarlo con métodos violentos o represivos. En consecuencia, del gobierno actual y de los partidos no es dable esperar una alternativa para la despolarización política. Sólo la sociedad puede empujarlos y presionarlos. Las organizaciones sociales, las comunidades, las iglesias, las instituciones, etc. deben reflexionar y hacer sentir, de forma inconfundible, su rechazo a la violencia política y su aspiración de convivir humanamente, lo cual implica equidad económica y social, y paz.

En los disturbios del 5 de julio se hizo presente, aunque de forma fugaz, lo peor de la realidad nacional. Pero al mismo tiempo, aparecieron algunas señales de esperanza las cuales, aunque débiles, deben ser rescatadas. En medio de las interpretaciones políticamente prejuiciadas del gobierno, de ARENA, del FMLN y de las empresas mediáticas, se dejaron escuchar otras voces, que condenaron sin vacilaciones la violencia política y la represión —aunque no necesariamente la manifestación como medio para hacer sentir las demandas sociales. Organizaciones sociales, instituciones e iglesias, cada una con su estilo y sus matices ideológicos, aprovecharon la apertura del espacio mediático para expresar, de forma coincidente, la necesidad de dar un giro radical a la forma predominante de hacer política y de resolver las diferencias entre el gobierno y los partidos, en particular, el FMLN. Proliferaron los llamados al diálogo, a la mesura y a la reflexión. Quizás no sea fortuito que estas voces hayan influido para

que el FMLN modificara su posición inicial y que el gobierno de ARENA también haya matizado sus primeras declaraciones impertinentes. La sociedad debe apoderarse del espacio que le corresponde para exigir a los políticos y a los funcionarios abandonar la confrontación y responder a sus necesidades más sentidas.

Estas voces unánimes, aunque todavía fragmentadas, son esperanzadoras. Aun cuando le falta madurar en articulación, sus primeros resultados positivos están a la vista. Desde 1992, es la primera vez que se expresa el rechazo a la forma violenta que los políticos y el gobierno han dado a su quehacer. Pero no hay que conformarse con esto, sino que es necesario articular esta energía. La presión sobre los protagonistas de la polarización política, para que suspendan las agresiones verbales y físicas, debe continuar e intensificarse. Es necesario exigir la discusión y la búsqueda de soluciones racionales y éticas a la problemática nacional. Una fuerza social articulada podría contribuir grandemente a contener la polarización política y social. En un segundo momento, también podría contribuir a contener la violencia social. Es evidente que los políticos no pueden ser dejados al vaivén de sus ambiciones y fuerzas. Sólo un frente social visible, integrado por las diversas organizaciones sociales, podría obligar a los poderes fácticos, al gobierno y a los partidos a abandonar la violencia social y política, y a exigir mejores condiciones económicas y sociales, las cuales se alcanzan no por la violencia, sino por medio de la discusión y la concertación política y social.

Ahora bien, mejorar los procedimientos políticos ya no es suficiente. Es necesario ir más allá y mejorar en el proceder humano. Una dimensión que aparece en la publicidad oficial, lo cual, en sí mismo, es un avance, porque muestra la existencia de cierta conciencia difusa sobre su importancia para la convivencia. Pero es insuficiente, porque esa conciencia todavía no se ha concretizado en políticas y conductas públicas. Los dirigentes políticos suelen olvidar, interesadamente, que la ética no se reduce al ámbito privado, pues también existe una ética pública. La ética no connota sólo una obligación de honestidad y de erradicación de la corrupción del ámbito público, sino que también incluye una posibilidad para construir lo humano, lo social y lo político. No puede haber una convivencia humana sin ética pública.

Si los protagonistas de la polarización de la vida política nacional han ido matizando sus posiciones, algunas veces, incluso contradiciéndose; si hasta el mismo presidente Saca se ha debido “morder la lengua” para no lanzar nuevas “acusaciones formales”; si la gran empresa mediática ha sentido el calor del cuestionamiento social, por reproducir sin crítica la versión gubernamental de los hechos, entonces, algo nuevo ha ocurrido en el país, después de 1992. Por primera vez, ha habido un rechazo y una deslegitimación pública del método violento para resolver las diferencias políticas. Esta novedad es aún frágil, e incluso puede ser pasajera. Si algo beneficioso deja esta coyuntura, es este rechazo a la violencia, concreto y pertinente, claro y firme, independiente del gobierno de ARENA y sus aliados y del FMLN y los suyos.

San Salvador, 25 de agosto de 2006.